

Multitudinaria protesta en defensa de Muface: «Con la salud no se juega»

CSIF abre la puerta a una huelga en la Administración si el Gobierno no reacciona

EL MUNDO

MARCOS IRIARTE MADRID

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha congregado este sábado a miles de trabajadores públicos frente a la Dirección General de **Muface** de Madrid en defensa del actual modelo de mutualismo, en riesgo de ser desmantelado por el choque entre Gobierno y aseguradoras para renovar el actual concierto, que vence a final de año. Según los organizadores, a la cita han acudido unas 35.000 personas procedentes de toda España.

«Con la sanidad no se juega», «la sanidad es un derecho», «Gobierno, escucha **Muface** está en lucha», «Si me quitan **Muface**, CSIF no callará»... los asistentes han coreado distintos lemas en defensa del modelo que permite a un millón y medio de funcionarios y a sus familias elegir su asistencia sanitaria.

«Con la salud de millón y medio de personas no se juega», apuntó el presidente de CSIF, Miguel Borra. La situación ya se ha convertido un problema, añadió, porque ya se están «denegando y retrasando» pruebas médicas a funcionarios, por lo que su sindicato se ha movilizado ante instituciones como el Defensor del Pueblo, el Congreso de los Diputados e, incluso, la Comisión Europea.

Borra consideró «terrible» lo que está sucediendo con la asistencia de los empleados públicos y aseguró que desde su sindicato «no vamos a cejar» en el empeño hasta que haya una solución. «Si el Gobierno no toma buena nota, no descartamos ninguna medida, incluyendo una huelga en las administraciones públicas», advirtió Borra.

La concentración, respaldada por el sindicato policial Jupol y la asociación de la Guardia Civil Jucil, forma parte del calendario de movilizaciones en defensa del mutualismo administrativo, que comenzaron el pasado 11 de noviembre con una manifestación en Madrid frente al Ministerio de Hacienda y las subdelegaciones del Gobierno de toda España para exigir también al Gobierno el desbloqueo de la negociación colectiva para mejorar las condiciones laborales del conjunto de los empleados públicos.

La de este sábado no ha sido la única protesta (aunque sí la más multitudinaria hasta ahora) en contra del desmantelamiento del modelo de **Muface**. El miércoles las organizaciones sindicales UGT, CCOO, ANPE, USO, ADIDE, USIE, UFP, ACAIP y SIAT también se concentraron para exigir al Gobierno y a las aseguradoras que se

concrete «lo antes posible» un acuerdo para **Muface** que garantice la asistencia y calidad sanitaria de los empleados públicos.

QUEJAS A BRUSELAS

El sindicato de trabajadores públicos ha llevado a Bruselas las «cientos» de quejas que han recibido en las últimas semanas por parte de los mutualistas en las denuncian que las clínicas están anulando, retrasando y suspendiendo citas e intervenciones quirúrgicas ante la incertidumbre sobre el concierto sanitario.

Con la presentación de estas quejas en Bruselas, desde el sindicato buscan que tanto el Parlamento Europeo como la Comisión sepan de la situación en la que se encuentran los trabajadores públicos y sus familiares asistidos por **Muface** para que «emprenda las acciones que considere necesarias», según informa Europa Press.

Las tres aseguradoras que ahora prestan atención en **Muface** (Adeslas, Asisa y DKV) no se presentaron a la nueva licitación para los años 2025 y 2026 convocada por la dirección de



Cabecera de la protesta. JAVIER BARBANCHO

Muface porque el Gobierno planteó una subida en las primas del 17,12%, la más alta de la historia, pero por debajo de la petición de las aseguradoras, que se acercaba al 40%.

El ministro de Función Pública, Óscar López, ha prometido que habrá una nueva licitación antes de que acabe el año. Pero lo cierto es que, a 15 de diciembre, no está clara la continuidad del servicio. El Ejecutivo da por segura que, con la ley en la mano, las aseguradoras están obligadas a mantener la asistencia a los funcionarios al menos nueve meses después de que finalice el convenio. Sin embargo, compañías y sindicatos creen que no se dan las condiciones para esa prórroga y que el servicio puede quedar interrumpido el 31 de enero.